

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-015-2018-00813-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de invalidez de origen común.
DECISIÓN	Confirma

*Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021)*

*Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 013**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ANTECEDENTES**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación invocado por la apoderada judicial del demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 6 de septiembre de 2019, dentro del proceso referenciado.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que al señor JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO, nació el día 15 de junio de 1955, y se afilió al sistema general de pensiones administrado por el ISS, hoy COLPENSIONES, a partir del 17 de agosto de 1981.

Indica la activa, que el actor a la temprana edad de 5 años padeció una enfermedad denominada “Meningitis”, que tiene un carácter degenerativo, ya que sus efectos no se percibieron de manera inmediata, sino con el transcurrir del tiempo, disminuyendo su capacidad física y laboral, y produciendo en él, unas secuelas neurológicas permanentes, que le han impedido la producción y comprensión del lenguaje, dependiendo de la ayuda de otras personas para comunicarse.

Que dadas las precarias condiciones del demandante, este solo pudo laborar en actividades simples relacionadas con el oficio de la construcción, lo anterior, en ejercicio de su capacidad laboral residual, logrando reunir un total de 524,46 semanas cotizadas hasta el 31 de agosto de 2008, fecha a partir de la cual le fue imposible seguir laborando debido a la merma de su capacidad residual, y es por ello que esta fecha debe ser el punto de partida para contabilizar la densidad mínima de cotizaciones a la que alude la Ley 860 de 2003.

Aduce el libelo genitor, que el actor fue calificado por COLPENSIONES, quien le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 82%, con fecha de estructuración del 15 de junio de 1960, fecha en que sufrió la “MENINGITIS”, pero al no estar de acuerdo con dicha calificación, se formuló el

recurso de apelación correspondiente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien mediante dictamen del 28 de junio de 2017, confirmó tanto la fecha de estructuración como el porcentaje de PCL asignado por la junta médica de COLPENSIONES.

En vista de lo anterior, el actor decidió calificarse particularmente ante la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, quien le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 78,1% conservando la misma fecha de estructuración.

Con fundamento en este ultimo dictamen de perdida de capacidad laboral, el demandante elevó solicitud pensional ante COLPENSIONES, pero dicha entidad le negó la prestación económica deprecada, al no acreditar 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, a sabiendas que dicho requisito es un imposible de cumplir, desconociendo los principios constitucionales, que le permitían al demandante acceder al reconocimiento pensional.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que al señor JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO le asiste derecho a percibir una pensión de invalidez de origen común, por reunir los requisitos consagrados en el art. 1° de la Ley 860 de 2003, en aplicación de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016; en consecuencia, SE CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de la prestación económica deprecada, en forma retroactiva a partir del 31 de agosto de 2008, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio de estos la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

COLPENSIONES dio respuesta oportuna a la demanda a través de su apoderada judicial (fls. 59 al 63) quien manifestó frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden a la edad del

demandante, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, así como las calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizadas al actor, su actual condición de persona invalida, la solicitud pensional presentada, y la respuesta negativa obtenida por parte de COLPENSIONES, al no lograrse acreditar la densidad mínima de cotizaciones exigida en el art. 1º de la ley 860 de 2003, sin que le consten los restantes supuestos facticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez; necesidad del equilibrio financiero del sistema; improcedencia de la indexación de las condenas; inexistencia de intereses moratorios; prescripción; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; y la genérica”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En el fallo objeto de apelación, la juez A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 6 de septiembre de 2019, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de la totalidad de pretensiones y cargos formulados en su contra por el señor JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación, y absteniéndose de imponer costas procesales en la primera instancia.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que el demandante no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez que reclama, conforme los parámetros de la sentencia SU-588 de 2016, pues según lo dictaminado por los médicos evaluadores de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, un retraso mental como el que padece el demandante, no significa necesariamente una enfermedad progresiva y/o degenerativa, por el contrario, este tipo de patología, con la terapia adecuada se puede lograr cierto grado de rehabilitación en el paciente.

También manifestó la falladora de instancia, que los peritos médicos consignaron en sus dictámenes de calificación, que en la historia clínica del paciente no era posible evidenciar la progresión de la patología de “meningitis” que le fue diagnosticada al actor en su infancia, y dichos peritos tampoco catalogaron la patología del demandante, como una de aquellas enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, al no existir historia clínica que así lo demuestre, lo que hace imposible la aplicación de las reglas consagradas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016.

## **VI. RECUSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La apoderada judicial del demandante, señala que si bien es cierto en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral proferidos por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA se indicó que no era posible catalogar la enfermedad del demandante como una de aquellas patologías degenerativas y/o progresivas, no puede perderse de vista, el comportamiento de las enfermedades en el tiempo, esto es, la historia natural de la enfermedad; además la sentencia de la Corte Constitucional SU-588 de 2016, no solo aborda las enfermedades degenerativas, sino que también alude a las enfermedades congénitas o crónicas que pueden o no generar progresión en el tiempo.

Lo anterior, por cuanto una enfermedad no tiene que ser necesariamente crónica, congénita y degenerativa, pues el requisito se cumple con cualquiera de estas 3 posibilidades, y omitió la falladora de instancia, analizar si la enfermedad del demandante era crónica y/o congénita, a sabiendas que los errores cometidos por las juntas de calificación, al no haber indagado a profundidad la historia clínica del demandante, no tenían por qué afectar el derecho pensional reclamado, máxime que el actor es una persona de especial protección constitucional, y esta probado que las cotizaciones realizadas hasta el mes de agosto de 2008 se hicieron en pleno uso de su capacidad laboral residual.

### **Alegatos de conclusión.**

Encontrándose dentro del término otorgado, la apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. ANA MARÍA TORO TORO, portadora de la tarjeta profesional número 313.795 del C.S. de la J., presentó sus alegatos de conclusión en esta instancia, exponiendo básicamente que si bien el demandante es una persona invalida conforme el dictamen de pérdida de capacidad laboral, no tiene en su haber la densidad mínima de cotizaciones, razón por la cual no cumple con los requisitos necesarios para obtener una pensión de invalidez de conformidad con lo estipulado en el artículo 39 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y tampoco le resulta aplicable los postulados de la sentencia SU-588 de 2016, pues la enfermedad de base, esto es, “meningitis”, no logra ser catalogada como congénita, degenerativa o progresiva.

A la referida apoderada judicial se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

### **VI. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de invalidez de origen común, densidad mínima de cotizaciones, capacidad laboral residual:** Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Planteado el recurso de apelación tal y como se encuentra, el problema jurídico que debe resolver la Sala, consiste en determinar si el señor JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO logró acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, y solo en caso de prosperar esta pretensión, la Sala pasará a analizar la fecha a partir de la cual debe iniciar el disfrute pensional, y si el retroactivo eventualmente causado puede ser objeto de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o su defecto de indexación monetaria.

## **Pensión de invalidez**

El artículo 38 de la ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

El estado de invalidez es una condición física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades físicas y/o psíquicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo una vida digna, en resumen es la pérdida de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en una actividad u oficio habitual, según lo establecido en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.

## **EL CASO CONCRETO**

En el presente caso, debe recordarse que el demandante JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO ha sido calificado como una persona invalida por parte del ISS hoy COLPENSIONES, según consta a folios 16 al 21 del plenario, con la copia del dictamen N° 2017208811WW del 23 de marzo de 2017, mediante el cual medicina laboral del ISS calificó al actor con una pérdida de capacidad laboral del 82%, derivada de una enfermedad de ORIGEN COMUN, con fecha de estructuración del 15 de junio de 1960, y la patología invalidante fue una "MENINGITIS NO ESPECIFICADA", sin embargo la misma no fue calificada como una enfermedad de tipo degenerativa, progresiva, catastrófica, o congénita.

También obran otras dos calificaciones realizadas al demandante por parte de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA (fls.23-24) y la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (fls.25-28).

La junta regional desató el recurso de apelación formulado por el actor contra al dictamen realizado por medicina laboral de COLPENSIONES, sin embargo, confirmó lo resuelto bajo el siguiente argumento:

*“Análisis y conclusiones:*

*Paciente calificado por afp Colpensiones con una pcl de 82% y fecha de invalidez a los 5 años de edad, apelo la fecha de estructuración, en la historia clínica aportada no hay información que permita modificar el dictamen, así mismo no existe un sustento científico que permita definir que su patología tiene un carácter degenerativo...”*

Por su parte la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, mediante un dictamen particular, calificó la pérdida de capacidad laboral del señor PALACIO PALACIO con un porcentaje del 78,1% derivada de una enfermedad común y conservó la misma fecha de estructuración, y como diagnostico motivo de la calificación, tuvo en cuenta una “DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA”.

Sin embargo, en esta calificación tampoco se determinó la progresividad de la enfermedad, y se concluyó frente al tema, lo siguiente:

*“El señor José del Carmen Palacio Palacio, presentó en la infancia un cuadro de meningitis, que, de acuerdo con lo relatado en la historia clínica, generó un daño severo en su capacidad cognitiva lo que le impidió un desarrollo y comportamiento acorde con lo establecido socialmente. A pesar de ello, el señor Palacio Palacio, según su familia, cotizó a la seguridad social por espacio de 10 años donde figuraba como trabajador de la construcción.*

*En la documentación aportada, no hay historia clínica que demuestre la progresividad del daño sufrido, por lo que se carece de información del proceso de su enfermedad, desde el evento de meningitis mencionado hasta la fecha. De acuerdo con la definición el retardo mental es una discapacidad que se inicia antes de la madurez y tiene efectos en el desarrollo produciendo alteración en la función social y limitando la independencia por la reducción de habilidades para el aprendizaje e incorporar conocimientos a partir de nuevas experiencias.*

*Esto es coherente con el posible daño producido por la meningitis que limitó el desarrollo intelectual del señor Palacio a partir del momento en que se controló la infección meníngea.*

*(...)*

*Desde el punto de vista medico no se puede afirmar que el daño del señor Palacio haya sido progresivo, porque carece de historia clínica que evidencie el progreso. Tampoco hay un soporte del tiempo aportado a la seguridad social, que según su familia son 10 años. Desde el punto de vista de la historia natural de la*



*enfermedad, un retraso mental establecido no es progresivo por si mismo, sino que en muchas ocasiones las terapias adecuadas y continuas mejoran la funcionabilidad, por tanto, no se puede definir como una enfermedad degenerativa o progresiva.*

Ahora bien, para el mes de junio de 1960 en que se estructuró el estado de invalidez del actor, este apenas contaba con 5 años edad, pues su nacimiento data del 15 de junio de 1955, según consta en su registro civil de nacimiento obrante a folios 14 del plenario, tornándose en un hecho imposible, el acreditar una densidad mínima de cotizaciones, tal y como lo señala el art. 1° de la Ley 860 de 2003, normativa según la cual una invalidez por enfermedad se entiende causada siempre y cuando el afiliado invalido haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

También obra en el plenario, la HISTORIA LABORAL del actor, visible a folios 36 al 41, según la cual, el demandante inició cotizaciones al ISS hoy COLPENSIONES a partir del 17 de agosto de 1981, y cotizó al régimen de prima media con prestación definida en calidad de trabajador dependiente hasta el día 31 de agosto de 2008, logrando reunir un total de 524,43 semanas cotizadas.

La parte demandante, aduce que el afiliado dejó de laborar y cotizar en el mes de agosto de 2008, debido a la merma en la capacidad residual, misma con la que venía trabajando desde el año 1981, y que por ende debe tenerse en cuenta la fecha de su ultima cotización, como el punto de partida para contabilizar esa densidad mínima de cotizaciones a la que alude el art. 1° de la Ley 860 de 2003, pues tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la Corte Constitucional ha permitido variar la fecha de estructuración para efectos de reunir el requisito de semanas cotizadas.

Para resolver esta problemática, debe recordarse que generalmente la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la incapacidad laboral del trabajador. Sin embargo, en ocasiones la pérdida de capacidad es un hecho que se presenta progresivamente en el tiempo y no concuerda con la fecha de estructuración de la invalidez. Es decir, existe una diferencia temporal entre la total incapacidad para continuar laborando y el momento en que inició la

enfermedad, presentó su primer síntoma u ocurrió el accidente, según sea el caso.

En efecto, la falta de concordancia entre la fecha de estructuración y el momento en que se presenta el retiro material y efectivo del mercado laboral puede explicarse por la presencia de enfermedades crónicas, padecimientos de larga duración, enfermedades congénitas o degenerativas, bien sea porque se manifestaron desde el nacimiento o a causa de un accidente.

Lo anterior implica que una pérdida de capacidad laboral generada de manera paulatina en el tiempo en ocasiones no corresponde a la fecha de estructuración dictaminada, pues en los mencionados eventos, aquella se limita a informar el momento en que acaeció la enfermedad y no la circunstancia misma de la incapacidad para trabajar.

En estos eventos en los que la invalidez se agrava progresiva y paulatinamente en el tiempo, la Corte Constitucional ha optado por darles un tratamiento jurídico especial y diferente al que se aplica a los casos ordinarios, tal es el caso de la **Sentencia SU-588 de 2016**, cuya aplicación reclama la parte demandante, donde se establecieron las reglas que deben ser tenidas en cuenta por las Administradoras de Fondos de Pensiones al momento de estudiar la solicitud de reconocimiento del derecho pensional de una persona con una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa.

Estas reglas consisten básicamente en lo siguiente:

**En primer lugar**, la Administradora de Fondos de Pensiones no puede limitarse a hacer el conteo mecánico de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración y debe hacer un análisis especial caso a caso, en el que además de valorar el dictamen, debe tenerse en cuenta otros factores tales como las condiciones específicas del solicitante y de la patología padecida, así como su historia laboral.

**En segundo lugar**, a las Administradoras de Fondos de Pensiones les corresponde verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez: (i) hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada

capacidad laboral residual del interesado; y (ii) que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social.

Y en **tercer lugar**, una vez el fondo de pensiones verifica que la invalidez se estructuró como consecuencia de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa y que existen aportes realizados al sistema por parte del solicitante en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, debe determinar el momento desde el cual verificará el cumplimiento del supuesto establecido en la Ley 860 de 2003.

Frente a este conteo de 50 semanas en los últimos tres años, la Corte Constitucional ha considerado que el punto de partida puede corresponder: **(i)** a la fecha de calificación de la invalidez o **(ii)** a la fecha de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico o, inclusive, **(iii)** la fecha de solicitud del reconocimiento pensional.

Lo anterior debido al carácter progresivo de estas patologías, pues si entre la fecha de estructuración y la calificación se conservan las capacidades funcionales y productivas, al punto de continuar con la vinculación laboral, es posible seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social, con el fin de alcanzar las semanas exigidas para el reconocimiento pensional.

Sin embargo, de las calificaciones de pérdida de capacidad laboral realizadas al demandante, y la escasa historia clínica aportada al plenario (fls. 15), no es posible colegir que las cotizaciones realizadas por el señor JOSÉ DEL CARMEN PALACIO PALACIO entre el los meses de agosto de 1981 y agosto de 2008, sean producto o correspondan a una capacidad laboral residual, al no estar demostrado técnica y científicamente que la patología que le causó la invalidez al demandante, hubiese empeorado paulatinamente con el transcurso de los años, esto es, que su discapacidad tuviere las características propias de una enfermedad progresiva y/o degenerativa, por el contrario, según lo dictaminado por los médicos evaluadores el actor sufrió una infección de meningitis a la corta edad de 5 años, generando en él, unas secuelas neurológicas permanentes o una DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA, con las que ha tenido que vivir toda su vida, y fue precisamente por ello que

logró emplearse en el oficio de la construcción, realizando labores simples acordes a su discapacidad.

No obstante, estas 524,43 semanas que registra la historia laboral del demandante, a juicio de la Sala no se cotizaron en ejercicio de una CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL como lo sugiere la recurrente, pues no está probada que la enfermedad del demandante hubiese iniciado en forma tenue o moderada y que la misma se hubiere ido complicando y agravando con el transcurso de los años, hasta llegar a un punto, en el que el afiliado perdiese toda su fuerza de trabajo de manera permanente y definitiva.

Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-040 de 2015, sostuvo lo siguiente:

*“cuando la invalidez proviene de un accidente o de una situación de salud que generó la pérdida de capacidad laboral de manera inmediata, la fecha de estructuración fijada en el dictamen médico legal coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, cuando la persona inválida padece de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, y la pérdida de la capacidad laboral se presenta de manera paulatina, existe la posibilidad de que si tal circunstancia no es tomada en cuenta por las autoridades competentes, la fecha consignada en el dictamen sea diferente a aquella en que efectivamente perdió su capacidad para trabajar de manera permanente y definitiva.*

*En relación con estas situaciones excepcionales, la Corte ha señalado, reiteradamente, que las personas que padezcan de una de estas enfermedades, que hayan conservado una capacidad laboral residual después de ser diagnosticadas y que hayan seguido trabajando, tienen derecho a que el fondo de pensiones les reconozca los aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, y hasta el momento en que perdieron su fuerza de trabajo de manera permanente y definitiva.”*

Y en el presente caso, con las pruebas aportadas al plenario no es factible inferir que la pérdida de capacidad laboral del señor PALACIO PALACIO se hubiese presentado de manera paulatina, y que por ende su derecho pensional deba resolverse en aplicación de las reglas de interpretación fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016, pues de conformidad con lo reglado en los arts. 164 y 167 del Código General del Proceso, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, e incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Finalmente, frente al reparo que presenta la recurrente, esto es, el no haberse analizado por parte de la A Quo, si la enfermedad del demandante era crónica o congénita, pues argumenta que con cualquiera de estas dos características se habilitaba la aplicación de la referida sentencia de la Corte Constitucional, advierte la Sala, que a la falladora de instancia no le correspondía calificar la enfermedad del demandante en cualesquiera de estas categorías, pues esta es una labor de las juntas médicas, y si así no lo hicieron, es porque de la historia clínica o natural del demandante, no era posible concluir que su patología de meningitis, fuese una enfermedad, degenerativa crónica o congénita, por el contrario la meningitis que invalido al demandante, se produjo cuando este apenas contaba con 5 años de edad, y dado que la misma se produce a través de una infección, de entrada se descarta la existencia de una enfermedad congénita o hereditaria, además, estima la Sala que el hecho de que las secuelas neurológicas permanentes que le produjo la infección de meningitis al demandante se dieran en su niñez, y que por ende hayan tenido una larga duración, de manera alguna se puede asimilar a una enfermedad crónica, toda vez que el demandante ya no padece esa enfermedad u infección, solo soporta sus secuelas, y tampoco esta probada la existencia de otras patologías que así lo sean y que hubiesen provocado en él una pérdida de la capacidad laboral de manera paulatina, que es en ultimas el elemento común de este tipo de enfermedades, que da lugar a la aplicación de la jurisprudencia constitucional.

Motivos por los cuales habrá de confirmarse la sentencia objeto de apelación por encontrarse ajustada a derecho, así como a la realidad fáctica y probatoria vertida en esta litis.

Sin costas en esta instancia, atendiendo a las mismas consideraciones tenidas en cuenta por la A Quo.

## **VIII – DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

**CUARTO: Sin COSTAS** en esta instancia.

**TERCERO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N °  
045 del 15 de marzo de 2021.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>